

PERÚ: INFORME DE 2020 SOBRE LA LIBERTAD DE CULTO

Resumen

La constitución prohíbe la discriminación por motivos de creencia o afiliación religiosa y dispone la libertad de conciencia y religión, ya sea de manera individual o colectiva. Estipula la separación de la religión y el Estado, pero también reconoce la importancia histórica de la Iglesia católica romana. Durante el año, el gobierno inscribió a 156 grupos no católicos, lo que representa un aumento respecto de los 148 inscritos en 2019. Entre los nuevos grupos inscritos se encontraban la Asociación Religiosa de la Buena Semilla en Majes, la Casa de Oración para Todas las Naciones, y el Ministerio de las Asambleas de Dios Abreu e Lima, todos ellos protestantes evangélicos. En enero, el Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAF), partido político fundado por el grupo religioso Asociación Israelita Evangélica del Nuevo Pacto y directamente afiliado a este, obtuvo el 8,4% de los votos y 15 escaños en el congreso, la mayor representación parlamentaria de un partido religioso no católico en la historia del país. El Consejo Interreligioso del Perú continuó con sus gestiones ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para lograr el acceso equitativo de todos los grupos religiosos a los beneficios gubernamentales, incluidos la exención de impuestos sobre la renta, las importaciones, los bienes y las ventas; los visados para los trabajadores religiosos; y la oportunidad de servir como capellanes militares, beneficios a los que la Iglesia católica tiene derecho automáticamente, pero que otros grupos religiosos deben solicitar. El consejo siguió debatiendo los reglamentos del gobierno en materia de libertad de culto, especialmente dentro del contexto de la pandemia de COVID-19.

El Consejo Interreligioso siguió promoviendo el respeto, la tolerancia y el diálogo entre las distintas tradiciones religiosas, entre otras cosas mediante un acto virtual con motivo del Día Internacional de la Tolerancia que puso de relieve el respeto por los migrantes, los refugiados y los desplazados. Los miembros de las comunidades musulmana y judía siguieron afirmando que algunas escuelas públicas y privadas y empleadores en ocasiones exigían a sus miembros que utilizaran las vacaciones acumuladas para las fiestas religiosas no católicas, como el Aíd al Fitr y Yom Kipur, lo cual es una opción conforme a la ley.

Los funcionarios de la embajada de los Estados Unidos siguieron dialogando con los funcionarios del gobierno con respecto a la libertad de culto, y analizaron cómo los grupos religiosos estaban ayudando en la respuesta humanitaria a los migrantes venezolanos en el país, en particular durante la pandemia de COVID-19. Aunque

las restricciones relacionadas con la COVID-19 dificultaron los eventos y la divulgación en persona, los funcionarios de la embajada dialogaron con los representantes del Consejo Interreligioso e instaron a los grupos religiosos a trabajar juntos a fin de proporcionar asistencia humanitaria a los más afectados por la emergencia sanitaria de la COVID-19 y su posterior crisis económica, incluidos los migrantes venezolanos en el país.

Sección I. Demografía religiosa

El Gobierno de los Estados Unidos estima que el total de la población es de 32 millones de habitantes (cifra a mediados de 2020). En el censo nacional de 2017 se informó que la población era un 76% católica (una disminución del 81% registrado en 2007); un 14% protestante (principalmente protestante evangélica, un aumento del 13% registrado en 2007); un 5,1% no religiosa (un aumento del 2,9% registrado en 2007); y un 4,9% de otros grupos religiosos (un aumento del 3,3% registrado en 2007). Los otros grupos religiosos incluyen a la Asociación Israelita Evangélica del Nuevo Pacto (un grupo religioso cristiano evangélico de origen local que mezcla creencias religiosas bíblicas y andinas, con énfasis en la vida agrícola comunal), los Testigos de Jehová, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días (Iglesia de Jesucristo), los judíos, los musulmanes, los baha'ís, los budistas, los cristianos ortodoxos y la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna.

Según el Congreso Judío Mundial, unos 3.000 judíos residen en el país, principalmente en Lima, Cusco e Iquitos. Según la Asociación Islámica del Perú, hay unos 2.600 musulmanes, 2.000 en Lima y 600 en la región de Tacna. Alrededor de la mitad de los integrantes de la comunidad musulmana de Lima son árabes y la otra mitad, nacionales convertidos a la religión, mientras que la de Tacna es en su mayoría pakistaní. La mayoría de los musulmanes son suníes.

Algunos pueblos indígenas que habitan en los Andes y las selvas amazónicas conservan sus prácticas religiosas tradicionales. Muchos ciudadanos indígenas de los Andes practican una religión sincrética que combina creencias católicas y precolombinas.

Sección II. Situación del respeto del gobierno hacia la libertad de culto

Marco jurídico

La constitución prohíbe la discriminación y persecución por motivos de creencia o afiliación religiosa y dispone la libertad de culto, ya sea de manera individual o

colectiva. Estipula que toda persona tiene derecho a mantener reserva sobre sus convicciones religiosas. Establece la separación de la religión y el Estado, pero reconoce el papel de la Iglesia católica como "elemento importante en la formación histórica, cultural y moral" del país.

Un tratado suscrito en 1980 entre el gobierno y la Santa Sede otorga ciertos privilegios institucionales a la Iglesia católica en ámbitos como la educación, los impuestos y la inmigración de trabajadores religiosos. Según una ley de libertad religiosa, los edificios, las casas y otros inmuebles pertenecientes a la Iglesia católica están exentos del pago del impuesto a la propiedad. Otros grupos religiosos suelen tener que pagar impuestos sobre la propiedad de sus escuelas y residencias para el clero, según la jurisdicción municipal y si el grupo solicita o recibe la exención de impuestos como organización sin fines de lucro. La ley exime a los trabajadores religiosos católicos del pago de impuestos a los viajes internacionales. El gobierno también exime a los sacerdotes y los obispos católicos del pago de impuestos a la renta por sus ingresos laborales. Hasta el 31 de diciembre estaba vigente una exención temporal de 2018 de estos impuestos para los grupos religiosos no católicos. Por ley, los militares solo pueden emplear a clérigos católicos como capellanes.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es responsable de las relaciones con los grupos religiosos, por medio de la Dirección de Asuntos de la Iglesia Católica y, en el caso de los grupos religiosos no católicos, a través de la Dirección de Asuntos Interconfesionales.

El proceso de inscripción en el Ministerio es opcional y voluntario. El objetivo declarado del registro es promover la integridad y facilitar la relación con el gobierno. Los grupos religiosos no tienen que inscribirse para obtener beneficios institucionales, pero al hacerlo pueden relacionarse directamente con el gobierno. Las reglamentaciones permiten a todos los grupos religiosos, inscritos o no, solicitar exenciones fiscales y visados de trabajador o residente directamente a las instituciones gubernamentales pertinentes. La inscripción es gratuita, el proceso suele durar una semana y el Ministerio de Justicia ayuda a completar los formularios de solicitud.

Por ley, todos los prisioneros, independientemente de su afiliación religiosa, pueden practicar su religión y buscar el consejo de alguien de su misma religión.

La ley exige que todas las escuelas, tanto públicas como privadas, impartan educación religiosa en los niveles primario y secundario sin violar la libertad de

conciencia del alumno, los padres o los docentes. Las escuelas públicas enseñan el catolicismo en la clase de religión, y el Ministerio de Educación requiere que el obispo católico que preside una zona apruebe a los maestros de educación religiosa de las escuelas públicas. Los padres pueden solicitar al director de la escuela que exonere a sus hijos de las clases de religión obligatorias. El gobierno puede eximir a escuelas privadas laicas y a las escuelas religiosas no católicas del cumplimiento del requisito de impartir educación religiosa. Los niños no católicos que asisten a escuelas públicas también están exentos de las clases de catolicismo. La ley establece que las escuelas no pueden desfavorecer académicamente a los alumnos que soliciten la exención de las clases de educación católica. Según un fallo dictado en 2018 por el Tribunal Constitucional, la financiación estatal de las escuelas dirigidas por grupos religiosos es inconstitucional porque es "incompatible con el principio de laicidad". El fallo establece que el Estado debe suspender la financiación de estas escuelas en un plazo razonable o establecer un sistema general y laico de subvenciones para todas las instituciones educativas privadas, independientemente de su afiliación religiosa.

La ley exige a todos los empleadores que se adapten a los días religiosos y festivos de todos los empleados; esta adaptación incluye permitir que un empleado utilice tiempo de sus vacaciones anuales con este fin.

Los trabajadores religiosos extranjeros deben solicitar un visado a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones (SNM) del Ministerio del Interior. Si el grupo religioso se inscribe en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la SNM acepta esa inscripción como prueba de que el grupo solicitante es una organización religiosa. Si el grupo no se inscribe en el Ministerio de Justicia, la SNM toma su decisión caso por caso.

El país es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Prácticas del gobierno

Durante el año, el gobierno inscribió a 156 grupos no católicos, lo que representa un aumento de los 148 inscritos en 2019. Entre los nuevos grupos inscritos se encontraban la Asociación Religiosa de la Buena Semilla en Majes, la Casa de Oración para Todas las Naciones y el Ministerio de las Asambleas de Dios Abreu e Lima, todos ellos protestantes evangélicos. Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y grupos interconfesionales locales, el gobierno aceptó y aprobó las solicitudes de todos los grupos religiosos interesados, y no se informó de ninguna denegación.

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Cristina Neyra Zegarra, se reunió virtualmente en octubre con líderes de las asociaciones cristianas protestantes y evangélicas, la Iglesia de Jesucristo y la Asociación Islámica del Perú. Neyra Zegarra agradeció a las minorías religiosas por sus contribuciones a la sociedad y les aseguró que el gobierno garantiza el derecho a la libertad de culto. La ministra afirmó que las ceremonias religiosas presenciales en los centros de culto, suspendidas desde marzo a causa de la COVID-19, se reanudarían bajo estrictos criterios de salud pública y sin discriminar ni privilegiar a ningún grupo.

El FREPAP, un partido político fundado por el grupo religioso Asociación Israelita Evangélica del Nuevo Pacto y directamente afiliado a este, obtuvo el 8,4% de los votos nacionales en las elecciones parlamentarias del 26 de enero. Con este resultado, el FREPAP obtuvo 15 escaños en el congreso, su mejor resultado desde la fundación del partido en 1989, y la mayor representación parlamentaria de un partido religioso no católico en la historia del país. Los 15 congresistas del FREPAP eran miembros de la Asociación Israelita Evangélica del Nuevo Pacto.

Según la Dirección de Asuntos de la Iglesia Católica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el gobierno otorgaba una subvención anual de aproximadamente 2,6 millones de soles (\$718.000 dólares) a la Iglesia católica para los estipendios de los arzobispos y pastores, de acuerdo con el tratado de 1980 celebrado con la Santa Sede. Cada una de las 45 jurisdicciones eclesiásticas católicas del país también recibía una subvención mensual de 1.000 soles (\$280 dólares) para el mantenimiento y las reparaciones de los edificios de la iglesia, algunos de ellos de gran valor histórico y cultural. Algunos clérigos católicos y laicos empleados por la iglesia recibieron subsidios del gobierno además de estos fondos. Estas personas representaban aproximadamente un ocho por ciento del clero católico y de los agentes pastorales. Según representantes de la Iglesia católica, la iglesia usó estos fondos y otros fondos de la iglesia para prestar servicios humanitarios a los pobres, independientemente de su afiliación o no afiliación religiosa. Otros grupos religiosos no tenían acceso a esa clase de estipendios.

El Consejo Interreligioso del Perú continuó con sus gestiones ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para lograr el acceso equitativo de todos los grupos religiosos a los beneficios gubernamentales, incluidos la exención de impuestos sobre la renta, las importaciones, los bienes y las ventas; los visados para los trabajadores religiosos; y la oportunidad de servir como capellanes militares, beneficios a los que la Iglesia católica tiene derecho automáticamente, pero que

otros grupos religiosos deben solicitar. El consejo siguió debatiendo los reglamentos del gobierno en materia de libertad de culto, especialmente dentro del contexto de la pandemia de COVID-19.

Los pastores protestantes dijeron que algunos soldados no católicos seguían teniendo dificultades para encontrar y asistir a servicios religiosos no católicos porque, por ley, solo los capellanes católicos pueden servir en las fuerzas armadas.

El fallo del Tribunal Constitucional de 2018 contra la financiación gubernamental de las escuelas dirigidas por organizaciones religiosas no entró en vigor mientras el gobierno revisaba su aplicación.

Sección III. Situación del respeto mostrado por la sociedad hacia la libertad de culto

El Consejo Interreligioso siguió promoviendo sociedades justas y armoniosas dentro de un marco de respeto, tolerancia y diálogo entre las distintas tradiciones religiosas. En noviembre, el consejo celebró un acto virtual para observar el Día Internacional de la Tolerancia, en el que se reunieron varios grupos religiosos y organizaciones internacionales tales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones con el fin de demostrar el apoyo de las comunidades confesionales a los migrantes, los refugiados y los desplazados en el país.

Los miembros de las comunidades musulmana y judía siguieron afirmando que algunas escuelas públicas y privadas y empleadores en ocasiones exigían a sus miembros que utilizaran las vacaciones acumuladas para las fiestas religiosas no católicas, como el Aíd al Fitr y Yom Kipur, lo cual es una opción conforme a la ley.

Los grupos religiosos y las organizaciones interconfesionales siguieron en coordinación con el gobierno, la sociedad civil y las organizaciones internacionales para prestar asistencia humanitaria a más de un millón de venezolanos desplazados que ingresaron al país desde 2017, independientemente de su afiliación religiosa. La Iglesia católica y varias iglesias protestantes evangélicas de Tumbes continuaron trabajando con el gobierno, la Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a fin de proporcionar alojamiento temporal a los migrantes venezolanos en la frontera norte.

Sección IV. Política e interacción del Gobierno de los Estados Unidos

Los funcionarios de la embajada de los Estados Unidos siguieron dialogando con los funcionarios del gobierno con respecto a la libertad de culto, y analizaron cómo los grupos religiosos estaban ayudando en la respuesta humanitaria a los migrantes venezolanos en el país, en particular durante la pandemia de COVID-19.

Aunque las restricciones relacionadas con la COVID-19 dificultaron los eventos y la divulgación en persona, los funcionarios de la embajada dialogaron con los representantes del Consejo Interreligioso e instaron a los grupos religiosos a trabajar juntos a fin de proporcionar asistencia humanitaria a los más afectados por la emergencia sanitaria de la COVID-19 y su posterior crisis económica, incluidos los migrantes venezolanos en el país. En noviembre, funcionarios de la embajada participaron en el acto virtual del Consejo Interreligioso para conmemorar el Día Internacional de la Tolerancia.